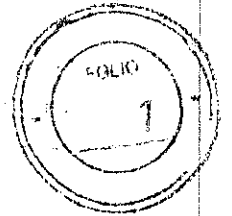
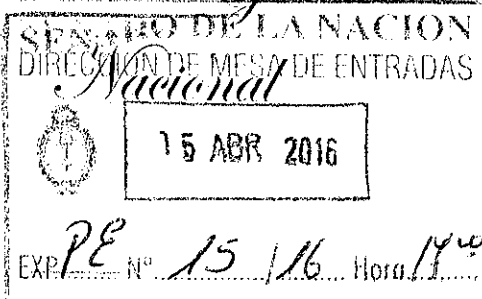


554



*El Poder Ejecutivo*



BUENOS AIRES, - 4 ABR 2016

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley de FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL Y DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONÓMICO.

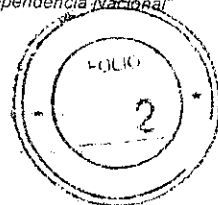
El presente proyecto de ley se encuentra inscripto en el marco de un plan piloto de rediseño de la organización judicial nacional y federal, compuesto por un conjunto de iniciativas cuyo tratamiento y sanción se solicita se realice en forma articulada a fin de alcanzar sus DOS (2) objetivos centrales.

El primer objetivo es facilitar la investigación, el juzgamiento y la sanción de la delincuencia organizada y de los delitos vinculados a ella, en orden a la política de Estado contenida en la "Declaración de Emergencia de Seguridad Pública" en el territorio nacional plasmada en el Decreto N° 228 del 21 de enero de 2016.

El segundo de los objetivos de este plan piloto es lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por la Ley N° 27.063, pendiente de implementación de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 27.150, y su modificatorio.

Asimismo, el presente proyecto se integra dentro del Plan Justicia 2020 propiciado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, cuyo objetivo es que la justicia se transforme en actor principal en la vida de

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



los argentinos y permita la resolución de conflictos en forma independiente, rápida y segura mediante el fortalecimiento integral del sistema judicial.

En los mencionados lineamientos se enmarca el presente proyecto, por el cual se busca descomprimir en forma inmediata las tareas de los actuales Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

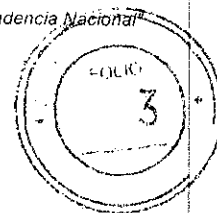
Para alcanzar dichos fines, las medidas aquí propuestas apuntan a incrementar la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y, a la implementación para determinados supuestos del juicio unipersonal para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal del país y los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

La aprobación de estas medidas por Vuestra Honorabilidad permitirá agilizar y facilitar el juzgamiento de los delitos del crimen organizado en línea con la política de Estado consagrada en el Decreto N° 228/16.

A través de la sanción de la ley proyectada se logrará, además, acelerar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en concordancia con la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia (conforme Decreto N° 606 del 22 de mayo de 2007; Acordada N° 42/08 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y Resolución N° 1442/13 de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN).

Por otra parte, permitirá agilizar el juzgamiento y la eventual sanción de los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



ocasión de sus funciones.

De este modo, la iniciativa legislativa puesta a vuestra consideración se orienta a fortalecer a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal mediante la creación de nuevos organismos, lo que sin lugar a dudas optimizará la respuesta jurisdiccional y colaborará con la superación de la desconfianza que reina sobre el sistema judicial actual.

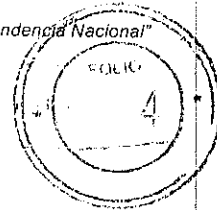
No puede soslayarse la actual congestión de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, que se traduce en demoras en la resolución de los procesos y en el uso masivo de medidas alternativas al juicio oral como forma de concluir los procesos penales. Por ello se propone por un lado, incrementar la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, y, a su vez, habilitar a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal del país y a los Tribunales Orales en lo Penal Económico la intervención unipersonal de los jueces de juicio en algunos supuestos determinados. De este modo, se aumentará la eficacia en la administración de justicia y se fomentará la celebración de debates orales, en consonancia con los lineamientos del sistema acusatorio.

En la actualidad existen TREINTA (30) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal y SEIS (6) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal habilitados, TREINTA Y CINCO (35) Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias habilitados y TRES (3) Tribunales Orales en lo Penal Económico.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.632 se dispuso la creación de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal

*[Handwritten signature]*

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



Nros. 7 y 8, cuyos magistrados fueron designados mediante los Decretos Nros. 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991 todos del 24 de septiembre de 2015, pero los organismos jurisdiccionales no han sido habilitados hasta hoy.

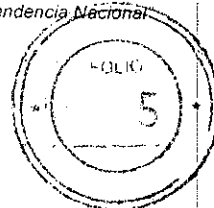
Recientemente el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en su sesión plenaria del 25 de febrero de 2016 dispuso que los magistrados designados para desempeñarse ante el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 7, sean trasladados al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 3 en el que estaban vacantes los TRES (3) cargos.

Es decir, que el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 7 creado por Ley N° 26.632 hoy se encuentra sin estar habilitado y sin sus jueces; mientras que el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 8 también creado por Ley N° 26.632, tiene a sus magistrados designados para ocuparlo, pero no se encuentra habilitado.

De la información estadística se desprende que resulta insuficiente la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, en tanto se encuentran sobrecargados y presentan importantes demoras en su funcionamiento. A ello se suma que en la mayoría de los casos se opta por soluciones alternativas o el archivo de las causas, celebrándose en muy pocas oportunidades el debate público.

Según datos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respecto de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal surge que, durante el año 2013, tramitaron DOS MIL CINCUENTA Y

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



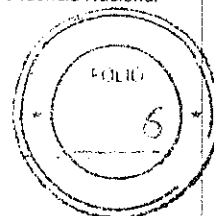
DOS (2052) causas, de las cuales OCHOCIENTAS DIECISÉIS (816) correspondían a nuevos ingresos y MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS (1236) correspondían a causas existentes o reingresadas; lo que arroja un promedio de TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS (342) causas por Tribunal.

De las DOS MIL CINCUENTA Y DOS (2052) causas en trámite, sólo NOVECIENTAS TRES (903) fueron resueltas o salieron de la órbita de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Esto implica, que del universo de causas en trámite sólo se resolvieron el CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44%), quedando un saldo pendiente de finalización del CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56%) de las causas.

Así las cosas, de las NOVECIENTAS TRES (903) causas referidas, el VEINTICUATRO POR CIENTO (24%) lo fue por el dictado de sentencia mediante el procedimiento especial de juicio abreviado, el VEINTIÚN POR CIENTO (21%) mediante salidas por incompetencias, el SIETE POR CIENTO (7%) lo fue mediante sobreseimientos, el CUATRO POR CIENTO (4%) mediante prescripciones, el TRES POR CIENTO (3%) mediante archivos y el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) mediante otras formas.

Es decir, que tan sólo el SEIS POR CIENTO (6%) de las causas fueron resueltas como producto de la celebración del debate oral, lo que equivale a SEIS (6) de cada CIEN (100) causas. El porcentaje restante corresponde a causas en las que se sobreseyó a los imputados, se declararon incompetencias, prescripciones y se utilizaron otras formas de resolución. Más aún, en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal existe una subutilización del juicio

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



oral. Esto se advierte cuando se toma al conjunto del sistema –sumando los datos de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias y de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal– cuya tasa de casos resueltos por juicio oral es del DIEZ POR CIENTO (10%).

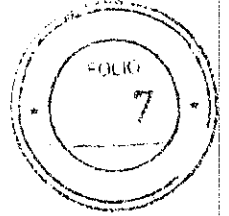
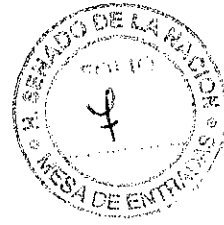
Los datos muestran que la creciente y constante carga de trabajo de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal atenta contra la adecuada y eficiente administración de justicia, contribuyendo a que muchas cuestiones no sean sometidas a debate oral y sean resueltas por otras vías, entre ellas, el dictado de sobreseimiento por prescripción de la acción penal o juicios abreviados. Esto impide que los procesos se resuelvan a partir de una sentencia absolutoria o condenatoria como resultado de un debate oral y público, que es la forma más acabada de impartir justicia, ya que implica expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida, permitiendo el debido esclarecimiento de los hechos sometidos a juicio. La sentencia como resultado del desarrollo de un debate es parte fundamental del sistema republicano y, también, de la publicidad de los actos de gobierno.

Es importante, a su vez, considerar los datos sobre el funcionamiento de la justicia, no sólo en función de la cantidad de causas en trámite sino a partir de un análisis del tipo de causas que procesan los órganos jurisdiccionales.

En este sentido, se advierte que un alto porcentaje de los casos en trámite ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal refieren tanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, como así también a casos de corrupción y de narcotráfico. Se trata, en la mayoría de los casos, de causas complejas que demandan una

*g*

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



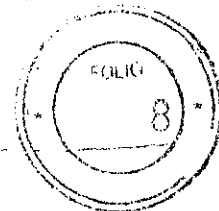
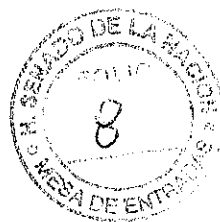
importante cantidad de tiempo y de recursos. Esto se traduce en que cada año, se realizan muy pocos juicios orales en relación al total de causas tramitadas y resueltas.

En el año 2013 los SEIS (6) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal sustanciaron CINCUENTA Y CINCO (55) juicios orales, lo que implica un promedio de NUEVE (9) causas por cada Tribunal.

Según datos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN durante el año 2013 de las DOS MIL CINCUENTA Y DOS (2052) causas que tramitaron ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, SETECIENTAS TREINTA Y CINCO (735) –TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36%)- fueron por delitos vinculados a la Ley N° 23.737. Al considerar las formas de resolución de estos casos, es posible advertir que de los TRESCIENTOS VEINTICUATRO (324) que se resolvieron o salieron de la órbita de la justicia federal CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) casos –CUARENTA Y CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (44,75%) se resolvieron por medio del juicio abreviado, DIECISIETE (17) por sobreseimientos –CINCO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (5,25%), SESENTA Y DOS (62) por incompetencias –DIECINUEVE COMA CATORCE POR CIENTO (19,14%)-, CUATRO (4) por prescripción –UNO COMA VEINTITRÉS POR CIENTO (1,23%), OCHO (8) fueron archivados –DOS COMA CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (2,47%)- y SESENTA Y SIETE (67) por otras formas –VEINTE COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (20,68%). Sólo VEINTIÚN (21) casos –SEIS COMA CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (6,48%)- fueron resueltos por juicio oral.

De lo expuesto, se deduce que se utiliza en forma

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



excesiva el juicio abreviado, mientras que muy pocos casos llegan a juicio oral. De hecho, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de los casos en los que se recurrió al juicio abreviado en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, durante 2013, estuvieron relacionados a infracciones a la ley de drogas; siendo éstos sólo el TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36%) del total de casos que ingresaron.

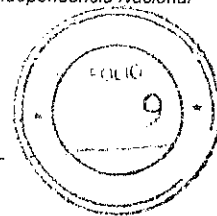
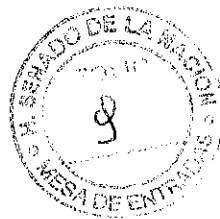
Por otra parte, de acuerdo al informe estadístico "El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Balance y desafíos" confeccionado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, actualizado al 23 de diciembre de 2015, se registran activas QUINIENTAS VEINTIÚN (521) causas en las que se encuentran imputadas DOS MIL DOSCIENTAS VEINTE (2220) personas. De ese total de causas, sólo en el VEINTINUEVE POR CIENTO (29%), equivalente a CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) causas se dictó sentencia. El porcentaje restante se distribuye entre el TRES POR CIENTO (3%), equivalente a QUINCE (15) causas, que se encuentra en juicio; el VEINTITRÉS POR CIENTO (23%), equivalente a CIENTO DIECISÉIS (116) casos, que fueron elevados a juicio cuyo inicio aún no está previsto y el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%), equivalente a DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE (237) causas, que se encuentra aún en etapa de instrucción.

En el informe citado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que existe una baja en el ritmo de celebración de los juicios desde 2014, considerando como una variable explicativa de ello que muchas de la causas actualmente en trámite constituyen "megacausas" que demandan mayor tiempo por la complejidad de la investigación y el alto número de víctimas e imputados.

*[Handwritten signature]*



## *El Poder Ejecutivo Nacional*

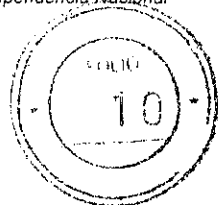


Asimismo, detectó que "...los tribunales tuvieron una postura más laxa respecto a la cantidad de audiencias por semana y a su duración. En este sentido, la combinación entre juicios grandes y complejos que demandan más tiempo y recursos, junto con menos cantidad de audiencias semanales o audiencias más cortas, parecen evidenciar una especie de "agotamiento" en el ritmo de los juicios que no contribuye a reactivar el proceso".

La complejidad de estas causas se funda en la cantidad de imputados, víctimas y testigos que involucran. Por ejemplo, respecto de la cantidad de imputados, en relación a las TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) causas en las que aún no se dictó sentencia, OCHOCIENTAS CINCUENTA Y UNA (851) personas se encuentran procesadas, a CIENTO VEINTIÚN (121) personas se les dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer, TRECE (13) personas fueron sobreseídas, CUARENTA Y UNA (41) personas fueron indagadas y CIENTO SETENTA Y TRES (173) personas se encuentran denunciadas. Un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) imputados fallecieron o fueron declarados incapaces sin ser sentenciados y hay, en la actualidad, CINCUENTA Y OCHO (58) personas que se encuentran prófugas de la justicia.

En este mismo sentido, la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad informa deficiencias en el tratamiento de las causas sobre delitos de lesa humanidad. Entre otras cuestiones señala la falta de recursos y de personal y la –ya mencionada– insuficiencia de jueces en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Puntualmente se señala que "...actualmente constituyen un número importante

## *El Poder Ejecutivo Nacional*



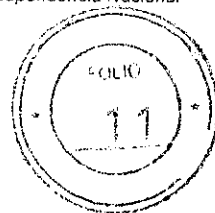
los magistrados que no han sido nombrados y la carga de causas sobre los tribunales que están en funciones es excesiva y demora el desarrollo de los juicios".

A partir de un informe del año 2012 realizado por la ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ), el CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA (CIPCE) y la OFICINA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (OCDAP), dependiente del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se advierten serias dificultades para el avance de causas en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones. Del análisis en detalle de VEINTÚN (21) causas con más de DIEZ (10) años de trámite se desprende que TRES (3) prescribieron, NUEVE (9) estaban radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, SEIS (6) estaban en etapa de instrucción y sólo TRES (3) habían tenido sentencia.

Además, en todas las causas analizadas, se advierte que, desde la comisión del hecho hasta su judicialización transcurrieron alrededor de CUARENTA (40) meses. Por su parte, el tiempo promedio que transcurre entre el momento de la denuncia de un hecho y el inicio de la etapa de juicio es más de OCHENTA Y SEIS (86) meses, es decir más de SIETE (7) años. Si a ello se le suma el tiempo que se tarda en la judicialización del hecho, puede afirmarse que entre la comisión del hecho y el momento en que éste está en condiciones de ser llevado a juicio transcurren un poco más de DIEZ (10) años.

Concluyen los autores del informe: "muchas veces la excesiva prolongación de este tipo de investigaciones encuentra su causa en la

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



carencia de recursos, la falta de especialización de los operadores y la complejidad del caso. Otras tantas obedece a la morosidad de los operadores judiciales, y en una cantidad, para nada despreciable, se debe a la actitud que los imputados y sus defensas adoptan frente a las investigaciones" (ACIJ, CIPCE y OCDAP, "Los procesos Judiciales en materia de Corrupción", 2012).

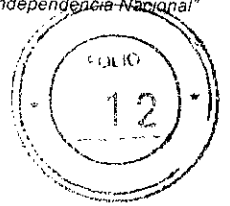
La información estadística da cuenta de la necesidad de ampliar la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal para poder descongestionar el sistema y aumentar la cantidad de juicios orales en general, en particular aquellos relacionados con los delitos de drogas, de lesa humanidad y de corrupción.

Ocurre que, tanto los casos de lesa humanidad, como los de corrupción y los de narcotráfico, son amplios y complejos. El aumento de las causas en trámite por estos delitos y la falta de reformas institucionales para adaptar el sistema de justicia, significan una recarga en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y han producido una congestión en esta instancia. Como consecuencia de ello, son postergados los debates orales. Estas demoras se potencian en los casos de corrupción más complejos y así, se arriman peligrosamente a la prescripción de la acción.

En consecuencia, mientras los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal continúen sobrecargados y los recursos no sean contestes con la carga de trabajo, difícilmente será posible agilizar el trámite de las causas y fomentar los debates orales.

En síntesis, desde hace algunos años ingresan a los

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal una importante cantidad de causas complejas que actualmente el sistema judicial parece no encontrarse preparado para tramitar. El colapso para atender en tiempo y forma los casos se torna evidente.

De no adoptarse medidas para facilitar el desempeño de los jueces, el total de causas pendientes de resolución de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal podría provocar más prescripciones o una mayor cantidad de resoluciones alternativas por fuera del debate oral plenario.

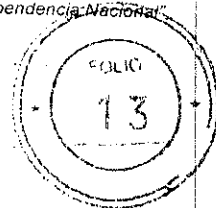
En una nota dirigida en septiembre de 2010 al presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, doctor Ricardo LORENZETTI, el presidente de la CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL de la Capital Federal, doctor Eduardo RIGGI, señaló que "...se advierte con gran preocupación la situación de sobrecarga y desborde jurisdiccional que se soporta con inédito esfuerzo por un sistema creado sin concebir las exigencias actuales que incluso revelan las verdaderas aptitudes -en ambos sentidos- de los operadores de dicho sistema".

Asimismo, recientemente, el Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, doctor Ricardo LORENZETTI, durante un acto convocado para anunciar un proyecto para hacer públicas las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico, expresó su máxima preocupación por estos temas instando la cooperación de los poderes del Estado.

En atención a lo expuesto precedentemente, se propone disolver UN (1) TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL de la Capital Federal de

g

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



los TREINTA (30) actualmente existentes y reasignar a sus funcionarios y empleados para que integren la dotación del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 8, creado oportunamente. De esa forma, los jueces ya designados para ocupar dichos cargos podrán comenzar a desempeñar sus funciones.

Por su parte, los jueces integrantes del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL de la Capital Federal que resulte disuelto, serán reasignados por mayoría simple de los miembros del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN a la cobertura de cargos vacantes actualmente existentes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Asimismo, se establece la transformación de UN (1) TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL de la Capital Federal cuya individualización será realizada por el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA por mayoría simple de sus miembros, en el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL de la Capital Federal N° 7.

Con fundamento en iguales lineamientos, se torna imperioso ampliar en forma urgente la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal para atender la gran demanda de causas y evitar la impunidad de sus autores y partícipes, dando así una respuesta satisfactoria a la demanda ciudadana de mayor justicia.

Por ello, se establece la transformación de CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, cuya individualización será realizada, en ambos casos, por el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA por mayoría

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



simple de sus miembros.

Se prevé que, para el caso de oposición por parte de alguno de los jueces integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal a la transformación de su cargo, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA por mayoría simple de sus miembros sea quien resuelva su traslado a alguna de las vacantes actualmente existentes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Asimismo, la cobertura de eventuales vacantes en los nuevos Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal se efectuará mediante la designación de jueces que actualmente se desempeñen en los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

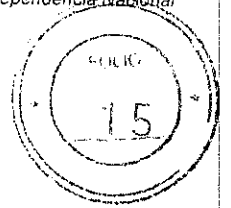
De esta forma, la cantidad de Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal que estarán en funcionamiento se elevará de SEIS (6) a TRECE (13), dando respuesta a una larga demanda de todos los actores vinculados al sistema judicial.

El presente proyecto prevé que los funcionarios y empleados de los Tribunales disueltos o transformados, que mantendrán sus cargos, continúen desempeñando sus funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados, salvo manifestación en contrario, en cuyo caso, serán reubicados por la autoridad competente, en otros órganos jurisdiccionales.

Respecto de las causas que se encuentren en trámite ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal que fueran disueltos o transformados, las mismas continuarán tramitando ante los órganos que

9

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



sucedan a los disueltos o transformados hasta su finalización.

La segunda medida que se propone mediante este proyecto para poder descongestionar el sistema y aumentar la cantidad de juicios orales en general, consiste en dotar a los jueces integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, como así también de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias, de herramientas efectivas que les permitan una mayor agilidad para el manejo y resolución de las causas, que mejoren la capacidad de impartir justicia y eleven la resolución de casos.

Según datos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, durante el año 2013 en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias, tramitaron DIECISÉIS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (16684) causas -2052 causas en los de Capital Federal y 14632 en los de las Provincias-. De ese total, fueron resueltas o salieron de la órbita del fuero CINCO MIL SEISCIENTAS NUEVE (5609) causas -incluyendo aquellas archivadas- (903 en los de Capital Federal y 4706 en aquellos con asiento en las Provincias). Esto demuestra que los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias, resuelven el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los casos en trámite.

Del universo de las causas resueltas, CINCO MIL SEISCIENTAS NUEVE (5.609) causas, tan sólo el DIEZ POR CIENTO (10%) - equivalente a 577 causas-, fueron concluidas a partir de la celebración del juicio oral.

De esas QUINIENTAS SETENTA Y SIETE (577)

g

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



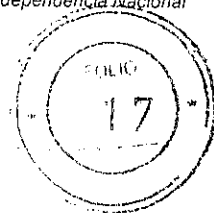
causas concluidas a partir de la celebración del juicio oral, CINCUENTA Y CINCO (55) corresponden a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal -a razón de NUEVE (9) debates por órgano- y QUINIENTAS VEINTIDÓS (522) emanaron de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias. Esto implica que se celebraron en promedio QUINCE (15) juicios orales por cada Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en las provincias.

Al considerar las sentencias en función del tipo de delito, se advierte que el SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (67,59 %) de los casos, equivalente a TRESCIENTAS NOVENTA (390) sentencias, lo fueron por infracción a la Ley N° 23.737; el SIETE COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (7,97%) de los casos, equivalente a CUARENTA Y SEIS (46) sentencias, estuvieron vinculados con delitos contra la libertad; el SEIS COMA VEINTICUATRO POR CIENTO (6,24%), equivalente a TREINTA Y SEIS (36) sentencias, lo fueron por delitos contra la administración pública y el CINCO COMA SETENTA Y DOS POR CIENTO (5,72%) de los casos, equivalente a TREINTA Y TRES (33) sentencias, lo fueron por delitos contra la fe pública. Los restantes debates se circunscribieron al juzgamiento de conductas vinculadas a delitos tipificados en decretos o leyes especiales -que constituye el CUATRO COMA DEICISEIS POR CIENTO (4,16%) de las causas, equivalente a 24 casos; mientras que, el TRES COMA NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (3,99%) correspondió a delitos contra la propiedad, equivalente a VEINTITRÉS (23) sentencias, el UNO COMA NOVENTA POR CIENTO POR CIENTO (1,90%) a delitos contra la seguridad pública, equivalente a ONCE (11) sentencias, el UNO COMA TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (1,39%) se limitó a delitos contra las

*[Handwritten signature]*



# *El Poder Ejecutivo Nacional*



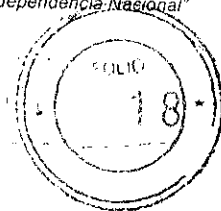
personas, equivalente a OCHO (8) sentencias, a homicidios el CERO COMA CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (0,52%), equivalente a TRES (3) casos, a delitos contra el estado civil el CERO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,35%), equivalente a DOS (2) casos, y a delitos contra el orden público el CERO COMA DIECISIETE POR CIENTO (0,17%), equivalente a UN (1) caso.

En lo que respecta a los Tribunales Orales en lo Penal Económico, durante el año 2013 tramitaron MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (1144) causas, de las cuales casi un VEINTIOCHO POR CIENTO (28%), equivalente a TRECIENTAS DIECISIETE (317) causas, ingresaron durante ese año. El SESENTA Y DOS POR CIENTO (62%), equivalente a SETECIENTAS SEIS (706) causas, estaba en trámite de períodos anteriores y el DIEZ POR CIENTO (10%) restante, equivalente a CIENTO VEINTIÚN (121) causas, correspondían a casos reingresados.

Se resolvieron o salieron de la órbita del fuero QUINIENTAS VEINTICUATRO (524) causas, lo que representa el CUARENTA Y CINCO COMA OCHO POR CIENTO (45,8%). De ese universo de casos, CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) causas finalizaron mediante juicio abreviado (37,02%), en CIENTO DOCE (112) se dictó el sobreseimiento (21,37%), en TREINTA Y CINCO (35) se declaró la incompetencia (6,68%), en OCHO (8) de ellas se declaró la prescripción de la acción (1,53%), VEINTE (20) fueron archivadas (3,82 %), CIENTO VEINTISIETE (127) fueron resueltas mediante "otras formas" (24,24 %) y solamente en VEINTIOCHO (28) causas se celebró el juicio oral (5,34 %).

En esta inteligencia, la sustanciación del juicio oral en presencia de UN (1) solo magistrado, en lugar de un Tribunal colegiado, mejoraría

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



ampliamente el servicio de justicia, sin mengua alguna de derechos y garantías procesales.

La realización de juicios orales ante Tribunales unipersonales tiene aplicación, desde hace varios años, en las provincias de BUENOS AIRES, MENDOZA, CÓRDOBA, CHUBUT, SALTA, SANTA FÉ y ENTRE RÍOS.

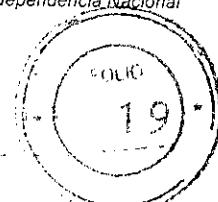
Esta forma de juicio permite un mejor servicio de justicia, mediante una más rápida y eficaz solución de los procesos, con las amplias garantías que brinda la audiencia de juicio en presencia de un magistrado imparcial e independiente.

La posibilidad de revisión amplia por parte de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL que se instaura a partir de la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de fecha 20 de septiembre de 2005, dictada en la causa N° 1681, caratulada "CASAL, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa", garantiza la vigencia y opera como un reaseguro de las garantías del proceso. Por lo tanto, ninguna garantía ni derecho Constitucional se encuentra vulnerada por el dictado de sentencia por parte de un Tribunal Unipersonal.

Teniendo presente los datos que se han expuesto a lo largo de estos fundamentos relativos al número de tribunales orales, cantidad de jueces, juicios orales sustanciados, volumen de causas en trámite y los tipos de delitos mayormente sometidos a debate oral, corresponde seguir los lineamientos de los Códigos Procesales Penales de las provincias de BUENOS AIRES, CÓRDOBA, MENDOZA, CHUBUT, SALTA, SANTA FÉ y ENTRE RÍOS.

En tal sentido, y teniendo en cuenta las escalas

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



penales de los delitos cuyo juzgamiento está asignado a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias, encontramos que aproximadamente VEINTICUATRO (24) delitos tienen una pena en abstracto de hasta SEIS (6) años. Otros VEINTITRES (23) delitos tienen una pena en abstracto cuyo máximo oscila entre SEIS (6) y QUINCE (15) años. Y, finalmente, unos SIETE (7) delitos poseen penas cuyo máximo en abstracto excede de QUINCE (15) años.

En lo que respecta a las escalas penales de los delitos cuyo juzgamiento se encuentra asignado a los Tribunales Orales en lo Penal Económico, encontramos que aproximadamente ONCE (11) delitos tienen una pena en abstracto de hasta SEIS (6) años, otros CINCO (5) tienen una pena en abstracto cuyo máximo oscila entre SEIS (6) y QUINCE (15) años y, finalmente UN (1) solo delito tiene en abstracto una pena máxima mayor a QUINCE (15) años.

En consecuencia, en la norma proyectada se establece que los jueces integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en las Provincias, ejerzan la jurisdicción en forma unipersonal en el trámite y resolución de las solicitudes de suspensión del proceso a prueba, en los supuestos de juicio abreviado, o cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no supere los SEIS (6) años.

Asimismo, se prevé la actuación unipersonal de los magistrados, cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años o, en caso de

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requieran la integración colegiada en oportunidad de la notificación del requerimiento de elevación a juicio.

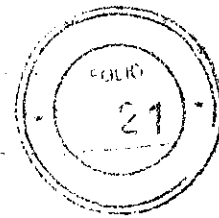
Por el contrario, indefectiblemente, corresponderá la integración colegiada del Tribunal para el juzgamiento de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años o, en todos los casos, cuando se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En aquellos supuestos en los cuales corresponda el ejercicio de la jurisdicción en forma unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados, según el ingreso de causas y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

Consecuentemente se propician asimismo, diversas modificaciones al CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por la Ley N° 23.984 y sus modificatorias, y a la Ley N° 24.050 y sus modificatorias.

El esquema propuesto brinda la posibilidad de multiplicación de capacidades, al permitir que los jueces actúen individualmente en una amplia cantidad de debates orales, lo que contribuirá a descomprimir el actual cúmulo de causas que colapsan los Tribunales Orales de la Justicia Federal. De esta forma, se garantiza el acceso al juicio oral plenario de un mayor número de casos, evitando su prescripción o la resolución por medios alternativos que obturan el debate oral, sin mengua de los derechos de defensa y al debido proceso.


# El Poder Ejecutivo Nacional



Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

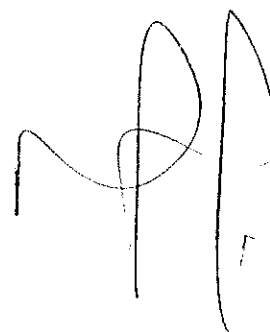
MENSAJE N° 554



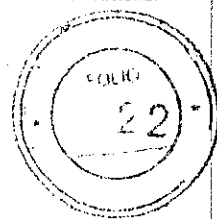
**Dr. GERMAN CARLOS GARAVANO**  
MINISTRO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS



**Lic. MARCOS PEÑA**  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS



*El Poder Ejecutivo  
Nacional*



EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,...

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL  
FEDERAL Y DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONOMICO.

CAPÍTULO I

CREACIÓN DE TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA  
CAPITAL FEDERAL

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la disolución de UN (1) Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros.

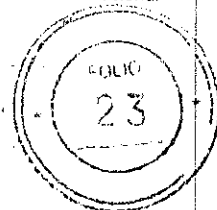
Los funcionarios y empleados del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, que por este artículo se disuelve, integrarán la dotación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 8, el que sucederá al órgano disuelto a los fines previstos en los artículos 6° y 16.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, que por este artículo se disuelve, serán asignados, por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros a la cobertura de cargos vacantes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

ARTÍCULO 2º.- Transfórmase UN (1) Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización será realizada por el Consejo de la Magistratura por

*9*

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



mayoría simple de sus miembros, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 7.

ARTÍCULO 3°.- Transfórmense CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, cuya individualización, en ambos casos, será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros.

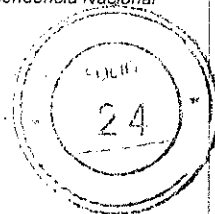
ARTÍCULO 4°.- Los SEIS (6) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal creados mediante las transformaciones dispuestas en los artículos 2° y 3° se integrarán por los jueces correspondientes a los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal transformados por dichas normas, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple de sus miembros.

ARTÍCULO 5°.- En caso de que alguno de los jueces integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal se oponga a la transformación de su cargo, el Consejo de la Magistratura resolverá, por mayoría simple de sus miembros, su traslado a alguna de las vacantes existentes en los restantes Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

ARTÍCULO 6°.- La cobertura de las eventuales vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal transformados por los artículos 2° y 3°, se efectuará mediante la designación de jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple de sus miembros.

ARTÍCULO 7°.- Los funcionarios y empleados de los Tribunales cuya disolución o

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



transformación se ha dispuesto en esta ley mantendrán sus cargos y continuarán desempeñando sus funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados. En caso de oposición, la autoridad competente dispondrá su reubicación en otros órganos jurisdiccionales de conformidad con las necesidades operativas.

ARTÍCULO 8°.- Los jueces designados en virtud de lo previsto en esta ley, podrán efectuar los reemplazos que consideren necesarios con relación al personal en función de los mecanismos que establezca la autoridad competente.

## CAPÍTULO II

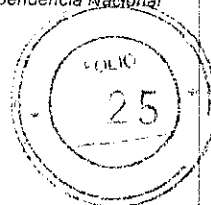
### JUICIO UNIPERSONAL Y COLEGIADO

ARTÍCULO 9°.- Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los Tribunales Orales en lo Penal Económico se integrarán con UN (1) solo juez:

- a) en los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- b) en los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- c) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años;
- d) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado o su defensor



# *El Poder Ejecutivo Nacional*



requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los Tribunales Orales en lo Penal Económico se integrarán con TRES (3) jueces:

- a) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años;
- b) si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 10.- En aquellos supuestos del artículo 9° en los que intervenga UN (1) solo juez, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

## CAPÍTULO III

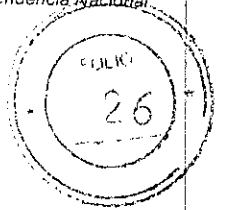
### MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

#### Y A LA LEY N° 24.050 Y SUS MODIFICATORIAS

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 32 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

**"Competencia e integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal"**

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



ARTÍCULO 32.- La competencia y la integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se rigen por las siguientes normas:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal juzgará:

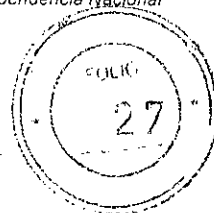
- 1º) En única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
- 2º) En única instancia de los delitos previstos en el artículo 210 bis del Código Penal.
- 3º) En única instancia de los delitos previstos en el Título X del Libro Segundo del Código Penal.

II. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con UN (1) solo juez:

- 1º) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III de este Código.
- 2º) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
- 3º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años.
- 4º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo cuando el imputado o su defensor requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.

III. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con TRES (3) jueces:

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



- 1º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años.
- 2º) Si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes."

ARTÍCULO 12- Sustitúyese el artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

## **"Facultades de la defensa**

ARTÍCULO 349.- Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de SEIS (6) días:

- 1º) Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.
- 2º) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.
- 3º) Solicitar expresamente la intervención de un tribunal colegiado, según corresponda.

Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de TRES (3) días de vencido el plazo anterior.

Dicho decreto deberá mencionar si el defensor o el imputado se

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



expidieron en los términos del inciso 3° del presente artículo."

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 351 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

## **"Auto de elevación**

ARTÍCULO 351.- El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha, los datos personales del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo 349, último párrafo.

Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones y sus contestaciones.

Si existieren varios imputados, aunque uno solo de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos."

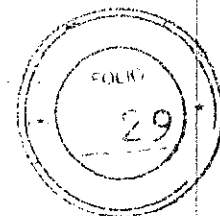
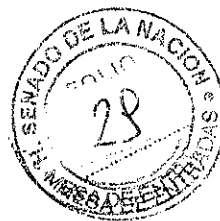
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

## **"Integración del tribunal. Citación a juicio**

ARTÍCULO 354.- Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.

Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



En caso de excusación o recusación del juez del trámite de la causa, la Secretaría procederá a reasignar la misma sorteando entre los restantes miembros, con igual criterio de equilibrio en la distribución.

Integrado el tribunal, el vocal actuante o el presidente del tribunal, según corresponda, citará al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes a fin de que al término de DIEZ (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de QUINCE (15) días."

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 24.050, y sus modificatorias, por el siguiente texto:

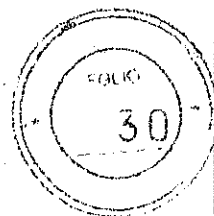
"ARTÍCULO 13.- Los Tribunales Orales en lo Penal Económico juzgarán en única instancia los delitos investigados por los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico. Se integrarán como tribunal unipersonal o como tribunal colegiado de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Código Procesal Penal de la Nación."

## CAPÍTULO IV

### DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 16.- Las causas en trámite ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal alcanzados por la disolución o transformación dispuestas en los artículos 1°, 2° y 3°, respectivamente, continuarán tramitándose hasta su finalización

# *El Poder Ejecutivo Nacional*



ante los órganos que sucedan a los disueltos o transformados.

En dichas causas la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal será el tribunal de alzada.

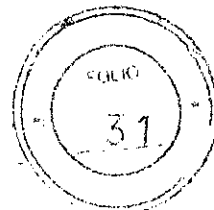
ARTÍCULO 17.- Las disposiciones sobre la realización de los juicios unipersonales serán de aplicación a las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 18.- Los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa en ejercicio de sus respectivas competencias tomarán las medidas conducentes para asignar a los fiscales y defensores para que actúen ante los órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 19.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes a la instalación y funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal que sucedan a los disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 20.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo

# El Poder Ejecutivo Nacional



de la Magistratura.

ARTÍCULO 21.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

**Dr. GERMAN CARLOS GARAVANO**  
MINISTRO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

**Lic. MARCOS PEÑA**  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS